

hoy escribe

Txillardegi (*)

puntaren

puntan

¿Quién es aquí el anti-demócrata?

Esta vez, durante su reciente visita a Portugal, el ministro Barriónuevo ha tenido indiscutiblemente el mérito de la claridad; aún cuando ésta haya sido rayana con el desparpajo cínico.

Barriónuevo nos ha dicho frontalmente lo que los psoc-cialistas y sus compañeros de viaje piensan de nosotros y del movimiento abertzale en general. Y ha concretado, gráficamente, que quienes militamos en HB somos llanamente un hatajo de anti-demócratas, de nazis tardíos, y de racistas a la sud-africana; en tanto que ellos (léase García Damborenea y sus seguidores) son las palomas blancas e incólumes de la política española, el partido de los demócratas de toda la vida (limpios de polvo y paja), la integérrima asociación de los defensores insobornables de los derechos humanos; y, en suma, el respetabilísimo colectivo que estructura hoy a los últimos garantes de los derechos fundamentales dentro del Estado español. (Y, por ende, dentro también de las «comunidades vasca y navarra»), como se dice últimamente para ser legal y buen español).

Todo eso suena bien; a algunos sobre todo. Pero adolece de un inconveniente de bulto: que, simplemente, es falso. Y es hora de decirlo así de claramente: y de desenmascarar a los Barriónuevo y adláteres.

Repitamos lo ya repetido en mil ocasiones: dentro del marco constitucional actual no hay democracia política para los vascos. Y, por supuesto, no hay democracia socialista para nadie.

Para fundamentar esa afirmación recordemos varias ideas básicas; tal como han sido expuestas por una organización internacional que no parece racional suponer obediencia consignas del Bloque KAS: la ONU. Leamos varios de esos textos y transcribámoslos, parcialmente al menos:

«El derecho a la autodeterminación y a la independencia de todos los pueblos sometidos a regímenes coloniales y racistas, así como a otras formas de dominación extranjera, es un derecho inalienable». (Resolución 32/147 de la ONU, adoptada el 16 de diciembre de 1977).

«La lucha que desarrollan los pueblos sometidos a la dominación colonial y extranjera para lograr la autodeterminación y la independencia, es una *lucha legítima*». (Resolución 32/154 de la ONU, de fecha 19 de diciembre de 1977).

Recordaremos, antes de pasar a otros aspectos, que en varias de esas declaraciones de la ONU al respecto, se explicita que la lucha es legítima aún practicada «por todos los medios».

Ya muchos años antes, en 1952 (Resolución 637, VII, de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, del 16 de diciembre de dicho año), dicha Organización había declarado solemnemente que «el derecho a la autodeterminación es una *condición previa* al disfrute de los derechos fundamentales del hombre».

Y mal que pese a Barriónuevo: *la actual legalidad española no incluye dicho derecho fundamental y previo*.

Hay más. El pueblo vasco, bajo una u otra bandera, lleva ya 150 años luchando por el reconocimiento oficial por Madrid de nuestro derecho al auto-gobierno. Cientos de miles de vascos no se sienten españoles ni franceses; ni lo han sido lingüística ni políticamente hasta nuestros días. Los vascos, mayoritariamente, sueñan con un futuro nacional propio, al margen de los avatares de los Estados vecinos, más vividos como ocupantes extranjeros que como institución propia.

Sin embargo, el Gobierno español (no sólo el del PSOE, sea dicho de paso) continúa haciendo ver que «no entiende» lo que pasa por aquí; y en presentar como «terrorismo y visceralidad irracional» el potente sentimiento que mantiene en lucha a este pequeño pueblo, generación tras generación. El País Vasco está en pie de guerra (sin hacer literatura al escribirlo) hace ya siglo y medio frente a Madrid. En tanto que las autoridades metropolitanas, *todas ellas* para ser exactos, siguen proclamando que aquí estamos encantados de la ley del embudo que se nos aplica una y otra vez; y que un poquito de «sana descentralización», y un muchazo de represión policial, bastan para acabar con tan «irracional asunto»: el de la «violencia en el Norte».

Y es por eso que, constatando una irreducible y pertinaz contradicción entre los principios democráticos de derecho internacional y la represión diaria, no podemos menos de decir, una vez más, que dentro del marco institucional actual *no hay democracia para los vascos*; y que quienes se oponen al cambio de marco jurídico son, estrictamente, *anti-demócratas*. Aparte, por supuesto, de enemigos radicales del pueblo vasco.

Cuando decimos que los vascos no admitimos, como base para una eventual solución, la Constitución vigente (por intrínsecamente unitarista y asimilacionista de los pueblos no castellanos del Estado); y cuando, consecuentemente, pedimos su reforma radical, de manera que el derecho inalienable a la autodeterminación pasa a ser un *derecho constitucional* (como se da, por ejemplo, en Yugoslavia), el insulto y el impropio no tardan en llegarnos: «nazis, viscerales, irracionales, racistas»...

Y es esta reacción la que no tiene nada de normal.

Hace casi cinco meses que Bélgica sigue sin gobierno. ¿La causa? El problema lingüístico belga. O, para ser más exactos: el divorcio insoluble entre flamencos y walones. Los dos pueblos que constituyen el Estado belga experimentan dificultades cada vez más insuperables para convivir fraternalmente en un Estado no federal.

Ahora bien, ¿quién pide hoy en Bélgica la reforma constitucional? Es decir, ¿la reorganización del país sobre una *base claramente federal* (a la yugoslava, digamos); con un Estado flamenco, por un lado, y un Estado walón, por otro?

La respuesta es ésta: que piden ya *todos los belgas*, excepto algunos nostálgicos reaccionarios, el paso a un *Estado federal bi-céfalo*. Lo piden los flamencos, hartos de francofonía, de deriva cultural afrancesada; y aún no curados de un siglo de una Bélgica «a la francesa». Y lo piden los radicales walones, conscientes de que Walonia se ha convertido en el «segundo plato» de Bélgica a todos los niveles: demográfico, político y económico. Ahora aparece como profético aquel sindicalista de extrema-izquierda, llamado Renard, que propugnaba ya en los sesenta una Walonia federal como única salida posible.

A pesar de todo esto ningún observador serio del problema belga se atrevería a decir que quienes, en Lieja o en Amberes, proponen la federalización de Bélgica, y el abandono del Estado unitario, son simplemente nazis camuflados, o racistas, o traidores de lesa patria. Pedir hoy en Bélgica el cambio de Constitución es *formular una reivindicación democrática de base*.

Nosotros, los patriotas vascos que, en HB o fuera de HB, reivindicamos que el poder español recoja explícitamente, en una reorganización constitucional, *el derecho inalienable del pueblo vasco a la autodeterminación*, hacemos lo mismo que muchos flamencos y muchos walones en el Bélgica actual. Y eso no tiene, ni aquí ni allí, nada de racista ni de nazi.

Si la españolidad de «Vascongadas y Navarra» es tan firme como sostiene Fraga, Barriónuevo y Savater, sólo nosotros tenemos razones para temer un proceso de autodeterminación. Reivindicar el derecho a la autodeterminación y al autogobierno tiene mucho de democrático y de progresista. Aplicarnos la ley del embudo una y otra vez es... bastante fascista.

Nosotros cuando hablamos así no mentimos a nuestro pueblo, ni tergiversamos la verdad. Barriónuevo y los suyos, sí.

(*) Escritor

...Ba gu ez gara ministroaz fidatzen!

Luis Carlos Croissier jaunak, Estatu espainoleko Industri ministroa berau, esan berri omen du gure egunkaria "fidagarritasun gutxikoa" dela. Ez dakigu, egia esan, zer kriterio edota zer neurri mota erabili duen Ministeritza horren poltronan jartzaren den abizen frantseseko "yuppi" horrek holakoak botatzeko. Ezta ere kriterio berberak erabiliz Estatu osoko beste periodikoki fidagarritasuna neurtzera sistematikoki dedikatzen den, egin beharko lukena egin beharrean.

Hala ere, alderdi on bat isladatzen du Croissierrek esandakoak. EGIN irakurtzen du ministroak. Je, je! Ale bat gehiago saltzen dugu Madrilén. Eta gauzak dauden moduan, IPC delakoa hazten denarekin eta krisialdi ekonomikoak gure gerrikoak hestuzeko duen indarra kontutan hartuta, ez da txantxetako gauza ale bat gehiago saltzea. Fidagarritasun gutxi egunkari honek, behintzat, ez du ale hori mespreziazten.

Beste gauza litzateke, ordea, aipaturiko ministroaren fidagarritasuna neurtzea. Geu ez gara horretan gehiegi sartuko ez bait dago beharri. Herenegun miloika pertsonak erakutsi zuten Estatu osoko hainbat lekutan, ministro horretaz eta Gobernuko gainontzeko guztien fidagarritasunaz pentsatzen dutena. Euskaldunako langileek, Asturiaseko meatzariek, leku guztietako irakasle eta maisuek eta, "last but not least", euskaldun guztiok eguneroko erakusten dute/dugu ze fidagarritasun gutxiok diren hortik zehar oportetarik buclatzeko hazguzki ofizialak erabiltzen dituzten elementuak eta bere kudeakilloak guztiak.

EGINek, gure egunkariak, daukan fidagarritasuna, ministro jauna, gure irakurleek neurtzen dute. Eta zure iritziek, Euskal Herriko industriagintzaz, bertako langilearen gorabeheraz eta industri sektore konfliktiboaz informazio zehatza eta eguneko izateko EGIN ezinbesteko iturri bihurtu da urteetan zehar. Galdetu bestela Biblako enpresarietara eta finantza munduan sartuta dabilazten. Galdetu banketara eta aurrezki kutxetako zuzendaritzaldi zehar irakurtzen duten zure departamentuak dagozkion gaiak segitzeko. EGIN fidagarritasun handikoa da, jauna, gertatzen dena kontatzen dugulako. Galdetu, berriaz, langileei zure ministroaren fidagarritasunaz. Geu gara, Croissier, zutaz fidatzen ez garenok! Jon BASTERRA

hemeroteca

Euskarazko egunkari publikoak

(Amañtiño, «Eguna», 88-4-28)

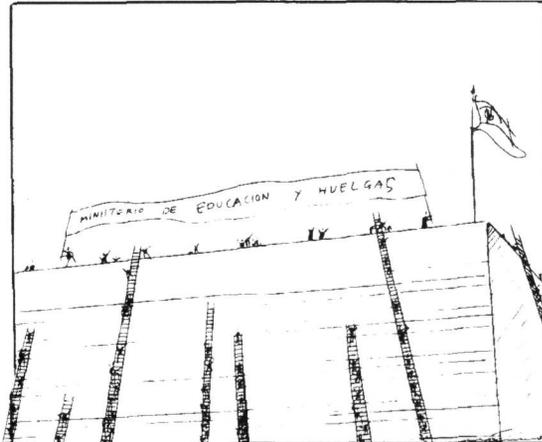
(...)Diru-aldetik ez dirudi arazo handirik agertu beharko lukeenik. Oro har, 60 langile, 40 orrialde eta 10.000 aletako egunkariak 400 milioi pezetakoko gastuak erakarritko litzuke urteko. Egunkaria, errotatiba duen beste enpresaren bati enkargatuko balitz, osoa baliatuko, inbertsioa ez litzateke 50 milioi baino gehiago izango. Diru-sarrerak, salmentak eta iragarkiz, 150 milioi izan zitezkeen, ozta-ozta. Beraz, egunkariaren urteroko mentsa 250 milioi inguru izango litzateke, aipaturiko lehen urteko inbertsioa kontutan hartu gabe. Bestalde, gaurregun, urteko, Jaureritzari ia ehun milioi kostatzen zaizkio EGUNA, «Hemen» eta beste zenbait aldizkariarentzako diru-laguntza. Laburbilduz, eztabaidagarri izan dai-

tezkeen notabaiteko erizpide eta lehentasuna ezarritik, diru horiek egunkariaren mesedetan bideratuko balira, euskal administrazioak orain baino 150 milioi gehiago jarri beharko litzuke, urte urte, euskal egunkaria argitaratuko baledi.

Nik neuk ez dut uste, honen politikatu, grinatua eta sakabanatua den euskal gizarte honetan administrazioak 250 milioitako subentzioa eman diezaiokkeenik edozein ekitntza pribaturik, euskal gizarte osoaren zuzen egunkaria berekaxa egin dezan. Gainera, administrazioak bere urteko aurrekontuen sistema aldatzen ez duen bitartean, urtero konkurtso publikoak erabaki beharko litzatekeenez zein enpresari eman, urteroko enpresa-aldaketak sortaraziko litzuzkeen zentzugabekeziek gainera, beti eskaintzarik merkeena aterako litzateke irabazle, administrazioak ez bait du, oraindik, kalitatea neurtzen eta saritzen asmaturik.

Nire ustetan irtenbide bakarra enpresa publikoaren aldetik etorriko litzateke. hau da, irritati-bistaren formula beretik. Jakin badakit prentsa publikoak ez duela «prentsa» onik, baina arrazoi historizista hutez aparte gure gizarteak ez du prentsa idatziari zertan ukatu irritari eta telebistari bideinakoak guztiez onartzen dion formula berbera. Ideia ez da batere berria, be-rauxe esan nuen 1981ean eta, geroztik, euri asko egin duen arren, lehenago lepotik jarraitzen du auziak.

Euskal egunkari publikoak ez da, gaurregun, inondik ere ametsa. Borondatearik ez omen da falta eta dirua ez da gehienetan, problema izaten. Beste gauza bat da, gero, nondik aterako gunituzkeen hiruzena kazarari ontxo, hizkuntza menderatzen dutenak eta euren ofizioaren jabe. Baina arazo hauek ez dira presupestatzen, gure ezkutuko mixeriak besterik ez bait dira.



"El País"